



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL 2 DE SAN MARTIN
FSM 17985/2021/TO1

Olivos, 12 de junio de 2024.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver de manera unipersonal (cfr. art. 32, ap. II, inc. 3°, C.P.P.N.) en la presente causa nro. FSM 17985/2021/TO1, acerca de la solicitud formulada en los términos del artículo 59, inciso 6°, del Código Penal, por SUSANA LILIANA BARROSO (titular del DNI 10.369.839, de nacionalidad argentina, nacida el 18 de mayo de 1952) y JOSÉ LUIS VALVA (titular del DNI 16.208.144, de nacionalidad argentina, nacido el 23 de septiembre de 1962), ambos asistidos por el Dr. Rodolfo Carrizo.

RESULTA:

I. Los encausados, SUSANA LILIANA BARROSO y JOSÉ LUIS VALVA, en conjunto con su defensa, ejercida por el Dr. Rodolfo Carrizo, presentaron un escrito manifestando: *“Que venimos a ofrecer la reparación integral prevista en el art. 59 del CPN, a fin de dar término a la presente. Para ello, ofrecemos la suma de \$500.000 (pesos quinientos mil) 50% al contado y el resto en dos cuotas iguales consecutivas”* (cfr. fs. 250).

II. De la presentación efectuada, se confirió traslado al Sr. Fiscal General, Dr. Alberto María Gentili, quien propició el rechazo del planteo formulado por su contraparte, en tanto concluyó que la propuesta de reparación integral prevista en el inciso 6° del artículo 59 del C.P. no resultaba aplicable al caso.

Para sostener su postura, luego de un breve repaso de los hechos atribuidos a los encausados en el requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal de instrucción y la calificación legal escogida en tal instrumento; efectuó una reseña del tratamiento brindado a la extinción de la acción penal en los delitos tributarios por las sucesivas leyes modificatorias de la ley 23.771 y, hasta la sanción de la actual ley 27.490; de la cual dedujo que las normativas en cuestión *“...han incluido una específica previsión relativa a la posibilidad de extinción de la acción penal que siempre ha sujetado la procedencia de dicho modo de extinción a determinadas situaciones y bajo una serie de requisitos de procedencia”*.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL 2 DE SAN MARTIN

FSM 17985/2021/TO1

Entendió que, frente a tal panorama normativo, resultaban de aplicación los principios de ley posterior y ley anterior; y, en el caso concreto, al no poder establecerse una prelación entre las normas, debía regir el principio por el cual las leyes posteriores derogan a las anteriores.

A partir de lo expuesto, afirmó: *“...la modificación a la ley Penal Tributaria, que refleja esa posibilidad, es una norma posterior a la que incorporó el inciso 6° al artículo 59 del Código Penal (ley 27.147 publicada en el B.O el 18-2-2015), y que, en ella, el legislador decidió apartarse de la previsión general, entendiendo que ese tipo de finalización del proceso, en el caso de los ilícitos tributarios, debe ser considerada excepcional y en los términos previstos en el artículo 16”*.

En línea con tal postura, entendió que *“...considerar viable en el marco de delitos tributarios la aplicación de la extinción penal por reparación integral del perjuicio, conllevaría a un sinsentido de la norma prevista en el artículo 16 del Régimen Penal Tributario; toda vez que esta última está prevista para un universo más acotado de conductas y exige determinados y mayores requisitos para su procedencia mientras que la norma general abarcaría todos los supuestos con menos exigencias que la norma especial”*.

Concluyó a partir de lo anterior: *“...más allá de que este Régimen no ha contemplado expresamente la inaplicabilidad en su ámbito del mecanismo de ‘conciliación o reparación integral del perjuicio’, lo cierto es que sí regula —de forma muy detallada y sujeta a previsiones muy específicas— una particular forma de extinción de la acción penal por pago total de la deuda tributaria o previsional, con una modalidad más restrictiva que la del régimen general previsto en el art. 59 inc. 6° del Código Penal, pues versa sobre ciertos delitos tributarios y ello obedece una decisión de política legislativa que tiene en cuenta los bienes jurídicos tutelados por la norma penal tributaria (Hacienda Pública y Sistema de Seguridad Social), en base a una ponderación propia y privativa de la actividad legislativa cuya constitucionalidad no se ha discutido en el caso”*.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL 2 DE SAN MARTIN

FSM 17985/2021/TO1

Citó en aval de su postura, pasajes relevantes de los votos de los Dres. Borinsky y Hornos en el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de fecha 8/05/2023, recaído en el marco de la causa N° FCB 87818/2018/TO1/1/CFC1 (cfr. fs. 252).

III. Sobre el planteo en trato se notificó Administración Nacional de la Seguridad Social, oportunidad en la cual, ese organismo puso de manifiesto la vigencia del Decreto 507/93, mediante el cual se transfirió a la Agencia Federal de Ingresos Públicos la competencia sobre aportes, registros de empresas, empleados y domicilios, como así también contribuciones y su debido contralor; y entendió que, en virtud de ello, correspondía a este último Ente Recaudador expedirse al respecto (cfr. DEO N° 11358687).

Así las cosas, al ser notificada la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Dr. Matías Alejo Gentile Brezigar, Jefe (Int.) de la Sección Penal B (DV PNLB) del Departamento de Coordinación Penal de la Dirección de Contencioso de los Recursos de la Seguridad Social de ese organismo, se opuso a la aplicación del instituto en cuestión, por no resultar aplicable a delitos tributarios.

Al respecto, afirmó: “...lo ha querido el legislador con la sanción de los delitos previstos en la Ley Penal Tributaria no ha sido proteger únicamente el patrimonio o erario público, sino que además lleva ínsito contenido de carácter social, motivo por el cual no basta con cancelar los montos adeudados para tener considerar reparado el daño”.

En esa senda, y de conformidad con los argumentos oportunamente expuestos por el Sr. Fiscal General, agregó: “...si bien por el artículo 59, inciso 6° se establece un mecanismo de extinción de la acción penal de aplicación de carácter general, debe tenerse presente que por el artículo 16 del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430, se establece un régimen de extinción de la acción penal específico para los delitos tributarios”.

Asimismo, recordó que, a través de la ley 27.541 (conforme ley 27.652) y su ampliatoria —ley 27.653—, se estableció un régimen de regularización excepcional (moratoria), a fin de que los contribuyentes





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL 2 DE SAN MARTIN

FSM 17985/2021/TO1

cancelaran sus deudas tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social contando, de cumplirse con una serie de requisitos dispuestos en la normativa, con el beneficio de suspensión y extinción de la acción penal.

Destacó en cuanto al *sub examen* que, si bien el contribuyente contó con la posibilidad de acogerse a los beneficios de alguna de las moratorias antes referidas (cuya vigencia fue hasta el 29/04/2022) y, de esa manera, extinguir la acción penal; decidió no hacerlo (cfr. fs. 255).

IV. A los fines de garantizar el contradictorio, se dio nueva vista a la defensa, la cual, en prieta síntesis, manifestó que la posición esgrimida por el representante del Ministerio Público Fiscal resultaba violatoria del principio de igualdad previsto por el art. 16 de la Constitución Nacional; y, por lo demás, en cuanto al ofrecimiento oportunamente realizado por sus asistidos, agregó: “...esta es la única manera de que la AFIP recupere parte de la deuda toda vez que mi defendidos solo tienen ese dinero para aportar para el pago de la deuda, siendo que tal vez podrían aportar un poco más, pero nunca llegarían a la deuda actualizada” (cfr. fs. 257).

Y CONSIDERANDO:

I. Llegado el momento de resolver sobre el ofrecimiento de reparación integral efectuado por los encausados, oído que ha sido el señor Representante del Ente Recaudador; y, habiendo dictaminado de manera negativa el señor Fiscal General, adelanto que no haré lugar a la pretensión intentada, por los motivos que expondré a continuación.

II. De manera liminar, cabe recordar que en el requerimiento de elevación a juicio se les atribuyó a SUSANA LILIANA BARROSO y JOSÉ LUIS VALVA “...en su calidad de empleadores, en tanto presidenta y gerente de la firma ‘HSI EVENTOS S.A.’ el no haber depositado total o parcialmente, dentro de los treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes con destino al sistema de la seguridad social, durante los meses de junio 2017, por la suma de \$135.026,04; diciembre 2017 por la suma de \$135.026,04; abril 2018 por la





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL 2 DE SAN MARTIN

FSM 17985/2021/TO1

suma de \$128.534,16; mayo 2018 por la suma de \$102.533,48; junio 2018 por la suma de \$155.631,87; julio 2018 por la suma de \$103.695,38 y diciembre 2018 por la suma de \$117.924,69...

Los hechos fueron catalogados como constitutivos del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, reiterado en siete ocasiones, que concurren realmente entre sí (arts. 45 y 55 del C.P. y art. 7° del Régimen Penal Tributario, según ley 27.490).

III. Sentado ello, corresponde recordar que el artículo 59, inciso 6, del Código Penal prevé que la acción penal habrá de extinguirse “[p]or conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”. Lo cierto es que, si bien en punto al rito al que hace referencia tal regla, no existen previsiones en la actualidad que regulen aquellas causales extintivas; jurisprudencialmente, han sido trazados límites a la aplicación de estos institutos tanto por parte de los tribunales del fuero penal ordinario, como por los del fuero penal federal.

En este sentido, resulta de especial relevancia en la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal el precedente “Villalobos”¹, del que se desprenden como requisitos comunes para la procedencia de los institutos de la conciliación y de la reparación integral que el hecho objeto de pesquisa conculque bienes jurídicos patrimoniales y que la víctima preste su plena conformidad con la reparación ofrecida.

Cabe destacar que, en lo que respecta a los casos tratados bajo la órbita del fuero penal federal, como el *sub examine*, por lo general, suelen ser materia de imputación y juzgamiento delitos que poseen como objeto de protección bienes jurídicos *supra* individuales —tales como la fe pública, la administración de justicia, entre otros— en conjunto con delitos que protegen al patrimonio de las personas —i.e. estafa—, por lo que aquí deberá atenderse a ello a los fines de dilucidar que se entenderá por reparación “integral” del daño y los requisitos que la misma deberá cumplir.

¹ C.F.C.P., Sala IV, causa CFP 25020/2015/TO1, “Villalobos”, resuelta el 29/8/2017.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL 2 DE SAN MARTIN

FSM 17985/2021/TO1

En este sentido, en el caso “Castiñeiras”, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal afirmó: “...sea que la solución se enmarque en el supuesto de la reparación integral del perjuicio o bien en el de la conciliación, cierto es **que el fiscal debe ser oído y emitir opinión en punto a la satisfacción de los intereses públicos involucrados en el conflicto penal, más aún en los casos de afectación de bienes supraindividuales**”² (el énfasis me pertenece). Cabe destacar que, con anterioridad, en la causa “Bobbio”³ la oposición Fiscal ya había sido considerada vinculante.

Por otro costado, en el ámbito del fuero penal ordinario, cabe reparar que, en el *leading case* “Verde Alba”, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional afirmó que “[L]a *reparación integral del daño debe ser racional*”, por lo que, para el correcto funcionamiento de dicho instituto y el de la conciliación, resultaban necesarias tanto la participación y el consentimiento de la víctima, como la participación y la conformidad del Ministerio Público Fiscal⁴.

IV. Luego, en el contexto de ese marco normativo y en la lógica de que los delitos tributarios indudablemente exorbitan los alcances de simple deuda dineraria, entiendo que, oídos el Sr. Fiscal General y el Ente Recaudador, no debe prosperar la solicitud bajo examen.

En este orden de ideas, cabe destacar que el representante del Ministerio Público Fiscal —en su rol de acusador estatal y representante del interés público— ha dejado en claro en su dictamen que, a su entender, el ofrecimiento efectuado por los encausados en autos no satisface los intereses públicos involucrados en el conflicto penal y ha desarrollado acerca de los motivos que lo llevaron a arribar a tal conclusión; la cual, por lo demás, ha sido compartida por el propio representante de la Agencia

² C.F.C.P., Sala IV, causa CFP 14958/2017/CFC1, “Castiñeiras, Patricia Mariana”, resuelta el 23/10/2020.

³ C.F.C.P., Sala IV, causa CFP 7245/2013/TO1/2/CFC1, “Bobbio, Gerardo Andrés”, resuelta el 1/11/2018.

⁴ C.N.C.C.C., Sala II, causa CCC 25872/2015, “Verde Alba”, reg. N° 399/2017, resuelta el 22/05/2017.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL 2 DE SAN MARTIN
FSM 17985/2021/TO1

Federal de Ingresos Públicos —entidad pública damnificada a raíz de los hechos objeto de este legajo—.

Por las consideraciones vertidas en los párrafos que anteceden, y oído el Sr. Fiscal General, el Tribunal **RESUELVE**:

NO HACER LUGAR a la solicitud efectuada por SUSANA LILIANA BARROSO y JOSÉ LUIS VALVA en los términos del artículo 59, inciso 6°, del Código Penal.

Regístrese, notifíquese, comuníquese.

FIRMADO: WALTER ANTONIO VENDITTI, JUEZ DE CÁMARA

ANTE MÍ: PABLO CÉSAR CINA, SECRETARIO DE CÁMARA

